



00000024

*Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales*

*Congreso de la República
Guatemala, C. A.*

24 de marzo del 2009

Licenciada
Ana Isabel Antillón
Dirección Legislativa
Congreso de la República
Su Despacho

Señora Directora:

De manera atenta me dirijo a usted y de conformidad con lo regulado en los artículos 39, 40 y 41 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, adjunto el **DICTAMEN FAVORABLE**, emitido en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, el día dieciocho del mes de marzo del año 2009, a la **Iniciativa No.4010** que dispone **APROBAR LEY DE FORTALECIMIENTO A LA PERSECUCION PENAL**.

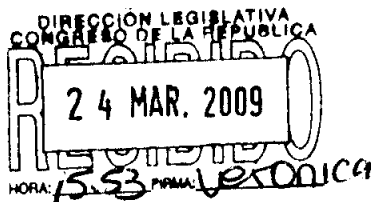
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterar a la Señora Directora las muestras de mi alta estima.

Oliverio García Rodas
Presidente de la Comisión



COMISION DE LEGISLACION
Y PUNTOS CONSTITUCIONALES
Congreso de la República de Guatemala, C. A.

cc. arch.





00000025

*Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales*

*Congreso de la República
Guatemala, C. A.*

DICTAMEN No. 01-2009

INICIATIVA No. 4010

LEY DEL FORTALECIMIENTO A LA PERSECUCIÓN PENAL

HONORABLE PLENO:

ANTECEDENTES

Con fecha tres de marzo de 2009 el Honorable Pleno del Congreso de la República conoció y remitió a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, la Iniciativa de Ley con registro número 4010 que dispone aprobar Ley del Fortalecimiento a la Persecución Penal.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La iniciativa contiene reformas a la Ley de Armas y Municiones, a la Ley Contra la Delincuencia Organizada, al Código Penal, al Código Procesal Penal y a la Ley Reguladora del Procedimiento de Extradición.

Considera esta Comisión que la presente iniciativa reúne los propósitos trazados y acoge los fines que persigue el Honorable Pleno del Congreso, de mejorar los instrumentos legales que permitan un combate más eficaz contra el crimen organizado en general que asola el país.

Considera esta Comisión oportuno excluir del Proyecto de Ley que dispone aprobar Ley del Fortalecimiento de la Persecución Penal, lo referente a la materia de armas y municiones, en virtud de que en sesión de fecha diecisiete del mes en curso el Pleno del Congreso resolvió conocer en sesión permanente la iniciativa que contiene la propuesta de una nueva Ley de Armas y Municiones, lo que pretendía regular la iniciativa 4010.

En consecuencia para no proponer al Pleno del Congreso el conocimiento de una misma materia en dos Proyectos diferentes como ya se indicó, se excluye del Dictamen y del Proyecto de Ley lo referido, procediendo a conocer la Comisión lo relacionado con las otras cuatro leyes que se pretende reformar.



Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales

Congreso de la República
Guatemala, C. A.

Igualmente se reforma la Ley Contra la Delincuencia Organizada para agilizar el combate a las bandas de delincuentes, para que sean efectivos los beneficios que puedan adquirir los colaboradores en la persecución penal de la delincuencia organizada.

Por otra parte se reforma el Código Penal en cuanto a los delitos de plagio o secuestro y el de extorsión para tipificar las nuevas conductas de malhechores que se valen de la tecnología para la comisión de hechos reñidos con la ley.

Así mismo se reforma el Código Procesal Penal en cuanto a la introducción de las video conferencias en la recepción de las declaraciones testimoniales para resguardar su integridad física y lograr que no evadan su obligación legal de declarar, por el temor de ser asesinados.

La iniciativa dentro de sus consideraciones indica que se han detectado lagunas y errores que han ido desvirtuando el espíritu que animó la legislación, las cuales deben estructurarse con el fin de evitar la portación y tenencia ilegal de armas, a efecto de normar con mayor severidad las penas para quienes violan la ley y para lo cual es necesario emitir el documento legal que legitime el derecho de portarla.

El proyecto de decreto reforma así mismo la Ley Reguladora del Procedimiento de Extradición para permitir que en el caso de personas extranjeras, cuya entrega sea solicitada por la comisión de delitos graves, considerados en la Ley Contra la Delincuencia Organizada, puedan los jueces tener la facultad de acceder o autorizar el procedimiento de extradición y la entrega de la persona.

La necesidad de adecuar las leyes a las circunstancias delictivas actuales es inminente.

CONSIDERACIONES DE ORDEN CONSTITUCIONAL Y LEGAL

La Constitución Política de la República en su artículo primero regula sobre la protección a la persona y a la familia por parte del Estado de Guatemala, en el que el fin supremo es el bien común.

De igual manera regula nuestra Carta Magna en su artículo dos que "es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida la libertad, la justicia, la



00000027

Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales

*Congreso de la República
Guatemala, C. A.*

seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona" y en su artículo treinta y ocho reconoce el derecho de tenencia y portación de armas de uso personal no prohibidas por la ley, en el lugar de habitación.

Además de las reformas antes mencionadas la iniciativa propone otras que complementan y reafirman lo ya considerado por lo que esta Comisión con fundamento en lo expuesto, estima que debe dictaminarse favorablemente el anteproyecto de mérito.

ANALISIS

La Comisión ha estudiado el contenido de la presente iniciativa por lo que se consideró modificar la misma en pro del beneficio y mejoramiento a la persecución penal.

Por tanto los miembros de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, por consenso, emiten Dictamen Favorable a la iniciativa que dispone aprobar Ley del Fortalecimiento a la Persecución Penal.

DICTAMEN DE LA COMISION

En base a las consideraciones Constitucionales, Legales y Políticas vertidas anteriormente, esta Comisión emite **DICTAMEN FAVORABLE** a la iniciativa 4010 que dispone aprobar **Ley del Fortalecimiento a la Persecución Penal**, por ser un Proyecto de Decreto viable, oportuno, conveniente y Constitucional.

Dado en la sala de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso de la República de Guatemala, en la ciudad de Guatemala el dieciocho de marzo de dos mil nueve.


Oliverio García Rodas
Presidente



COMISION DE LEGISLACION
Y PUNTOS CONSTITUCIONALES
Congreso de la República de Guatemala, C. A.



00000028

[Handwritten mark]

*Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales*
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

[Signature]
Rodolfo Anibal García Hernández
Vicepresidente

[Signature]
José Alberto Gándara Torrebiarte
Secretario

[Signature]
Rosa María Angel Madrid de Frade

[Signature]
Héctor Alfredo Nuila Ericastilla
Novado

[Signature]
Francisco José Contreras Contreras

[Signature]
Carlos Enrique López Girón

[Signature]
César Augusto Del Águila López

[Signature]
Daniel Humberto Caballeros

[Signature]
Carlos Valentín Gramajo Maldonado

[Signature]
Beatriz Canastuj

José Alejandro De León Maldonado

[Signature]
Jorge Mario Barrios Falla





00000029

*Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales*

*Congreso de la República
Guatemala, C. A.*


Félix Ovidio Morzón Pedroza


Mariano Rayo Muñoz

Oscar Valentín Leal


Gladís Anabella De León Ruiz


Ronnie Danilo Escobar


Rosa Elvira Zapeta



COMISION DE LEGISLACION
Y PUNTOS CONSTITUCIONALES
Congreso de la República de Guatemala, C. A.





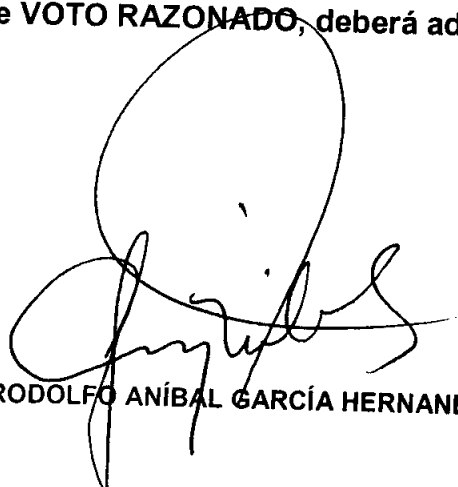
00000030

*Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales
Congreso de la República
Guatemala, C. A.*

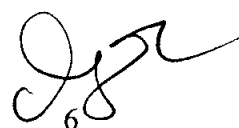
VOTO RAZONADO

Nosotros, RODOLFO ANÍBAL GARCÍA HERNANDEZ y HÉCTOR ALFREDO NUILA ERICASTILLA, Diputados integrantes de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, al aprobar y firmar el Dictamen Favorable de la Iniciativa No.4010, Ley del Fortalecimiento de la Persecución Penal, RAZONAMOS NUESTRO VOTO, con respecto al artículo 25 del Proyecto, que propone reformar el artículo 201 del Código Penal, sobre el delito de plagio o secuestro, para dejar constancia que en la modificación por adición, queda claro que la pena de muerte no será extensiva o impuesta en los supuestos de los literales a) y b) ya que de conformidad con el Pacto de San José, Convención Interamericana de los Derechos Humanos, ley de rango superior a la Legislación interna del país, existe una prohibición específica aceptada por el Estado de Guatemala.-----
Este VOTO RAZONADO, deberá adjuntarse al dictamen de la Comisión.-----

Guatemala, 18 de marzo de 2009.


Dip. RODOLFO ANÍBAL GARCÍA HERNANDEZ


Dip. HÉCTOR ALFREDO NUILA ERICASTILLA


6



00000031

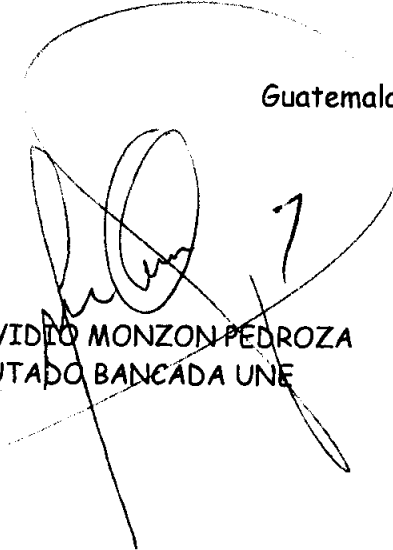
Correspondencia de Diputados
Congreso de la República de Guatemala, C.A.

VOTO RAZONADO

YO, FELIX OVIDIO MONZON PEDROZA, Diputado integrante de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, al aprobar y firmar el Dictamen Favorable de la Iniciativa No.4010, Ley del Fortalecimiento de la Persecución Penal, RAZONO MI VOTO, con respecto al artículo 25 del Proyecto, que propone reformar el artículo 201 del Código Penal, sobre el delito de plagio o secuestro, para dejar constancia que en la modificación por adición, queda claro que la pena de muerte no será extensiva o impuesta en los supuestos de los literales a) y b) ya que de conformidad con el Pacto de San José, Convención Interamericana de los Derechos Humanos, ley de rango superior a la Legislación interna del país, existe una prohibición específica aceptada por el Estado de Guatemala.-----

Este VOTO RAZONADO, deberá adjuntarse al dictamen de la Comisión.-----

Guatemala, 23 de marzo de 2009


FELIX OVIDIO MONZON PEDROZA
DIPUTADO BANCADA UNE



00000032

DECRETO NÚMERO _____-2009

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

CONSIDERANDO:

Que dado el incremento de la delincuencia que padece el país es urgente reformar las leyes que constituyen instrumentos idóneos de lucha contra la ola de criminalidad, entre las cuales se destacan la Ley de Armas y Municiones, la Ley Contra la Delincuencia Organizada, el Código Procesal Penal y el Código Penal; especialmente en aquellos temas que permitirán que fiscales y jueces puedan realizar una mejor labor de investigación, y de condena en su caso, para abatir el alto grado de impunidad que la población reclama, todo lo cual constituirá un mayor fortalecimiento de la persecución penal para alcanzar gradualmente la paz social.

CONSIDERANDO:

Que el aumento desproporcionado de la tenencia de armas de fuego sin control ha colocado al ciudadano honesto en situación de indefensión ante el incremento de la violencia y que la necesidad de protección ha llevado a la tenencia y portación de armas de fuego sin ninguna fiscalización del Estado.

CONSIDERANDO:

Que al aplicar diariamente las leyes específicas, se han detectado lagunas y errores que ha ido desvirtuando el espíritu que animó la legislación, las cuales deben estructurarse con el fin de evitar la portación y tenencia ilegal de armas, a efecto de normar con mayor severidad las penas para quienes violan esta ley y para lo cual es necesario emitir el documento legal que legitime el derecho de portarla.

CONSIDERANDO:

Que para mayor eficiencia en la administración de justicia se hace necesario proteger a las personas que como testigos declaran en los procesos penales, así como aquellos que acogiéndose al beneficio obtenido a través de su colaboración en la investigación deben ser escuchados.

CONSIDERANDO:

Que es necesario reformar la Ley Contra la Delincuencia Organizada, para hacer más efectivas las modificaciones a la Ley de Armas y Municiones; las que a su vez deben



00000033

ser congruentes con otras leyes concomitantes para combatir al crimen organizado como el Código Penal, buscando una mejor adecuación a las circunstancias delictivas actuales, de los delitos de secuestro y extorsión.

POR TANTO:

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la literal a) del artículo 171 de la Constitución Política de la República de Guatemala.

DECRETA:

La siguiente:

LEY DEL FORTALECIMIENTO DE LA PERSECUCIÓN PENAL

CAPITULO I

**DE LA REFORMA AL DECRETO 21-2006
LEY CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA**

Artículo 1. Se reforma el artículo 2 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, Decreto 21-2006 del Congreso de la República, adicionando el literal "h", el cual queda así:

"h) De los contenidos en la Ley de Armas y Municiones, Decreto 39-89 del Congreso de la República".

Artículo 2. Se reforma el artículo 3 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, Decreto 21-2006 del Congreso de la República, adicionando el literal "i" el cual queda así:

"i) Los delitos contemplados en la Ley de Armas y Municiones, Decreto 39-89 del Congreso de la República".

Artículo 3. Se reforma el artículo 92 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, Decreto 21-2006 del Congreso de la República, el cual queda así:

"Artículo 92. Beneficios por colaboración eficaz. Salvo los delitos a los que se refiere el artículo 25 de la presente Ley, se podrán otorgar los siguientes beneficios por colaboración eficaz:

a) El criterio de oportunidad o la suspensión condicional de la persecución penal;



00000034

- b) Durante el juicio oral y público y hasta antes de la dictación de sentencia, el sobreseimiento para los cómplices, o la rebaja de la pena hasta en dos terceras partes al momento de dictarse sentencia, para los autores;
- c) La libertad condicional o la libertad controlada a quien se encuentre cumpliendo condena;

Los beneficios regulados en el presente artículo no se otorgarán a los jefes, cabecillas o dirigentes de organizaciones criminales”.

Artículo 4. Se reforma el artículo 93 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, Decreto 21-2006 del Congreso de la República, el cual queda así:

“Artículo 93. Trámite del beneficio. Salvo los delitos a los que se refiere el artículo 25 de la presente Ley, los beneficios señalados en los literales a) y b) del artículo anterior, se tramitarán ante el juez o tribunal que está conociendo la causa en la cual el interesado tiene la calidad de sospechoso, imputado o acusado. Los beneficios señalados en el literal c) del artículo anterior serán tramitados ante el Juez de Ejecución.

Para la aplicación de criterio de oportunidad, se seguirá el procedimiento establecido en el Código Procesal Penal para los cómplices o autores del delito de encubrimiento.

Para los efectos de aplicar los beneficios del artículo anterior, no se tomarán en cuenta las limitaciones que establecen las leyes en razón de la calidad de funcionario público del interesado o en razón de la duración máxima de las penas.

El colaborador eficaz deberá entregar todos aquellos bienes, ganancias y productos que hubiere obtenido como consecuencia de su actividad ilícita en la organización criminal”.

Artículo 5. Se reforma el artículo 94 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, Decreto 21-2006 del Congreso de la República, el cual queda así:

“Artículo 94. Parámetros para otorgar beneficios. Los beneficios descritos en el artículo 92, se otorgarán en consideración a los cuatro elementos siguientes considerados conjuntamente:

- a) El grado de eficacia o importancia de la colaboración en el esclarecimiento de los delitos investigados y en la sanción de los principales responsables;
- b) La gravedad de los delitos que han sido objeto de la colaboración eficaz;
- c) El grado de responsabilidad en la organización criminal del colaborador eficaz, sin perjuicio de lo establecido en el inciso final del artículo 92, y

00000035

- d) La gravedad del delito y el grado de responsabilidad que en él se le atribuye al colaborador eficaz”.

Artículo 6. Se reforma el artículo 101 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, Decreto 21-2006 del Congreso de la República, el cual queda así:

“Artículo 101. Resolución judicial sobre el acuerdo de colaboración. El acuerdo que contenga el beneficio y los demás requisitos establecidos en el Artículo 98 de la presente ley, deberá ser aprobado por el Juez **competente**. Al resolver el acuerdo presentado, el Juez podrá hacer las modificaciones pertinentes para adecuar el beneficio a las obligaciones a imponer, de acuerdo a la naturaleza y modalidad del hecho punible.

En caso que la resolución fuere denegada, el Fiscal podrá apelarla conforme el procedimiento que establece el Código Procesal Penal”.

Artículo 7. Se reforma el artículo 104 en su inciso 4, del Decreto 21-2006 del Congreso de la República, el cual queda así:

“Artículo 104. Medidas de protección. El Fiscal podrá establecer según el grado de riesgo o peligro existente, las medidas de protección necesarias para garantizar la seguridad y preservar la identidad del protegido y la de sus familiares, su domicilio, profesión, lugar de trabajo, pudiendo adoptar las siguientes:

1. Protección policial en su residencia o su perímetro, así como la de sus familiares que puedan verse en riesgo o peligro; esta medida puede abarcar el cambio de residencia y ocultación de su paradero;
2. Preservar su lugar de residencia y la de sus familiares;
3. Previo a la primera declaración del imputado, preservar u ocultar la identidad del beneficiario y demás datos personales;
4. Después de **su declaración otorgada ante juez competente** y siempre que exista riesgo o peligro para la vida, integridad o libertad del beneficiado o la de sus familiares, se podrá **otorgar el cambio de identidad** y facilitar su salida del país, con un estatus migratorio que les permita ocuparse laboralmente, para lo cual el fiscal dictará las medidas y acciones necesarias”.

Artículo 8. Se adiciona el Artículo 104 BIS a la Ley Contra la Delincuencia Organizada, del Decreto 21-2006 del Congreso de la República, el cual queda así:

“Artículo 104 BIS. La oficina de protección, con la asesoría del fiscal encargado del caso será la encargada de tramitar las medidas y acciones de protección necesarias dictadas por el Fiscal General de la República.”

00000036

Artículo 9. Se adiciona el Artículo 104 TER a la Ley Contra la Delincuencia Organizada, del Decreto 21-2006 del Congreso de la República, el cual queda así:

“Artículo 104 TER. Cambio de identidad. El cambio de identidad es una medida de protección de carácter excepcional y solo será aplicable cuando las otras medidas no sean suficientes o efectivas para garantizar la seguridad del beneficiario. El cambio de identidad se podrá extender a los familiares del beneficiario.”

Artículo 10. Se adiciona el Artículo 104 QUATER a la Ley Contra la Delincuencia Organizada, del Decreto 21-2006 del Congreso de la República, el cual queda así:

“Artículo 104 QUATER. Requisitos. Para aplicar la medida del cambio de identidad se requiere:

- a) Que sea en forma voluntaria y con pleno conocimiento del beneficiario;
- b) Que sea solicitada por el agente fiscal encargado del caso o por el propio beneficiario;
- c) Que el grado o nivel de riesgo sea el máximo según lo estipulado en las normas respectivas;
- d) Que la información proporcionada sea de relevancia para el esclarecimiento del hecho o para procesar a los responsables.”

Artículo 11. Se adiciona el Artículo 104 QUINQUES a la Ley Contra la Delincuencia Organizada, del Decreto 21-2006 del Congreso de la República, el cual queda así:

“Artículo 104 QUINQUES. Obligatoriedad de la declaración procesal. El cambio de identidad solo se tramitará inmediatamente después que la persona haya proporcionado su declaración ante autoridad judicial competente. En caso la declaración se realice en la etapa preparatoria o intermedia deberá efectuarse en calidad de prueba anticipada. En caso se realice en el juicio oral, deberá efectuarse durante el desarrollo del debate.”

Artículo 12. Se adiciona el Artículo 104 SEXTIES a la Ley Contra la Delincuencia Organizada, del Decreto 21-2006 del Congreso de la República, el cual queda así:

“Artículo 104 SEXTIES. Vigencia del cambio de identidad. El cambio de identidad es de carácter permanente debiendo el beneficiario y sus familiares utilizar la nueva identidad de forma permanente. Sin perjuicio de lo anterior, si ha desaparecido el riesgo que motivó la medida, el beneficiario y sus familiares podrán solicitar se les tramite su antigua identidad.”

Artículo 13. Se adiciona el Artículo 104 SEPTIES a la Ley Contra la Delincuencia Organizada, del Decreto 21-2006 del Congreso de la República, el cual queda así:

00000037

“Artículo 104 SEPTIES. Nueva declaración. En caso se requiera una nueva declaración del beneficiario, con posterioridad a habersele otorgado el cambio de identidad, la declaración se efectuará con su identidad original, debiendo las autoridades establecer los mecanismos adecuados para brindar seguridad a la persona incluyendo la posibilidad de realización de videoconferencias o evitando el contacto visual con la persona para el efecto, el encargado de la Oficina de Protección deberá tener el registro correspondiente de la identidad original.”

Artículo 14. Se adiciona el Artículo 104 OCTES a la Ley Contra la Delincuencia Organizada, del Decreto 21-2006 del Congreso de la República, el cual queda así:

“Artículo 104 OCTIES. Confidencialidad. Los funcionarios o empleados públicos que por razón del cargo, conozcan la información respecto al cambio de identidad de la persona, así como a la identidad original, deberán resguardar bajo garantía de confidencia la información. El funcionario o empleado público que revele dicha información será responsable penal y administrativamente.”

Artículo 15. Se adiciona el Artículo 104 NONES a la Ley Contra la Delincuencia Organizada, del Decreto 21-2006 del Congreso de la República, el cual queda así:

“Artículo 104 NONIES. Trámite del cambio de identidad. En caso el Director de la Oficina de Protección emita dictamen favorable de cambio de identidad, la Oficina de Protección deberá:

- a) Informar al fiscal encargado del caso de la opinión emitida. El fiscal no deberá saber la información de la nueva identidad;
- b) Llevar un registro detallado de la identidad original y de la nueva identidad del beneficiario, y en caso necesario de su familia;
- c) Determinar los aspectos específicos de la nueva identidad;
- d) Establecer las comunicaciones con las autoridades competentes de registros públicos para informarles del cambio de identidad. En dichas comunicaciones, la Oficina de Protección advertirá a los empleados o funcionarios correspondientes de la obligación de confidencialidad respecto de la información de cambio de identidad y de la responsabilidad penal y administrativa por el incumplimiento de dicha obligación.

Entre los documentos que deberán emitirse con la nueva identidad del beneficiado, se encuentran los siguientes: partida de nacimiento; cédula de vecindad; licencia de conducir; pasaporte; carné de seguro social; número de identificación tributaria (NIT).

00000038

- e) Establecer comunicación con las autoridades extranjeras competentes para la reubicación del beneficiario y, en caso sea necesario, en su familia, proporcionando la información necesaria para el efecto.
- f) Cubrir los gastos de traslado y acompañar en el traslado a la persona beneficiada.

CAPITULO II

DE LAS REFORMAS AL DECRETO 51-92 CÓDIGO PROCESAL PENAL

Artículo 16. Se reforma el segundo párrafo del artículo 210 del Código Procesal Penal, Decreto 51-92 del Congreso de la República, el cual queda así:

“De la misma manera podrá procederse cuando se trate de testigos que teman por su seguridad personal o por su vida, o en razón de amenazas, intimidaciones o coacciones de que sean objeto, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 218 Bis y 218 Ter”.

Artículo 17. Se adiciona el artículo 218 BIS, al Código Procesal Penal, Decreto 51-92 del Congreso de la República y sus reformas, el cual queda así:

“Artículo 218. BIS. Declaración por Medios Audiovisuales de Comunicación. Si por circunstancias debidamente fundadas el testigo, perito o colaborador eficaz no puede concurrir a prestar declaración en forma personal, el tribunal, a pedido de parte o de oficio, podrá ordenar la realización de la declaración testimonial a través de videoconferencia o cualquier otro medio audiovisual de comunicación similar de la tecnología, de las mismas o mejores características, que resguarden la fidelidad e integralidad de la declaración y garanticen a las partes el adecuado ejercicio de sus derechos procesales. Se podrá utilizar este mecanismo, cuando se den cualquiera de las siguientes circunstancias:

- a) Cuando el testigo, perito u otra persona esté siendo beneficiado con alguno de los mecanismos de protección reguladas en la Ley de Protección de Sujetos Procesales y otras personas vinculadas a la administración de Justicia Penal;
- b) Cuando la persona haya sido o sea colaborador eficaz según lo estipulado en la Ley Contra la Delincuencia Organizada;
- c) Cuando debido a otras circunstancias, la declaración del testigo, perito u otra persona relevante en el proceso, constituya un riesgo, amenaza o pueda ser sujeto de intimidación en contra de su vida, integridad o la de su familia”.



00000039

Artículo 18. Se adiciona el artículo 218 TER, al Código Procesal Penal, Decreto 51-92 del Congreso de la República y sus reformas, el cual queda así:

“Artículo 218. TER. Procedimiento en Caso de Declaración por medio Audiovisual. La declaración a través de videoconferencia u otros medios audiovisuales de comunicación, podrá realizarse durante el debate oral y público o en carácter de anticipo de prueba. La diligencia se realizará con base en lo siguiente:

- a) En caso se efectúe la diligencia en anticipo de prueba, el órgano jurisdiccional deberá informar a las partes, con no menos de diez días de anticipación, de la realización de la diligencia, sin perjuicio de lo dispuesto en este Código en dicha materia en relación al peligro de pérdida de elementos de prueba y de actos de extrema urgencia. Durante el debate oral deberá programarse la diligencia al inicio del mismo. En el anticipo de prueba se observarán los artículos 317, 318 y 348 de este Código, recibiendo la declaración testimonial mediante video conferencia u otro medio electrónico cuando proceda.
- b) El órgano jurisdiccional competente efectuará el trámite respectivo ante las autoridades del país o lugar donde resida la persona; en caso se trate de un testigo protegido o colaborador eficaz, deberá mantener bajo reserva de confidencialidad el trámite y el lugar donde se encuentra el mismo;
- c) En el lugar donde se encuentre el testigo, perito u otra persona cuya declaración sea relevante en el proceso, debe estar presente una autoridad designada por el órgano jurisdiccional competente, la cual tiene la obligación de verificar la presencia del testigo, perito u otra persona; tomar sus datos de identificación personal, verificar que la persona no está siendo coaccionada al momento de prestar declaración; verificar que las instalaciones reúnan las condiciones adecuadas y que se cuente con los aparatos audiovisuales idóneos y conectados con enlace directo con el tribunal. El órgano jurisdiccional competente a cargo de la diligencia, dejará constancia de haberse cumplido la obligación precedente;
- d) El órgano jurisdiccional competente deberá verificar que las instalaciones y medios audiovisuales permitan que las diferentes partes procesales puedan oír y observar con fidelidad la declaración prestada por un testigo, así como ejercer sus derechos en materia de interrogatorio;
- e) En caso que el testigo, goce del beneficio del cambio de identidad o se determine que por razones de seguridad se deba ocultar su rostro, se tomarán todas las precauciones necesarias para evitar que el mismo pueda observarse a través del medio audiovisual que se utilice.

Toda la diligencia deberá ser grabada y debidamente registrada. Una vez concluida la diligencia, el personal autorizado por el órgano jurisdiccional competente, que se encuentre en el lugar donde estuviere la persona que tuviere que declarar, accionará acta de la diligencia, misma que deberá ser firmada por todos los presentes y remitida



al órgano jurisdiccional que emitió la orden respectiva. Las partes tendrán acceso a los documentos, grabaciones y registro producto de dicha diligencia”.

En estas diligencias siempre deberá comparecer el defensor designado por el imputado, en su defecto el defensor público que se designe por el Juez, y el fiscal del caso, cuidándose porque se observen debidamente las garantías constitucionales del derecho de defensa y el debido proceso. En caso de no existir imputado, igualmente se hará comparecer a un defensor público de oficio, para garantizar la legalidad de la declaración testimonial en esta forma: así mismo comparecerán en ese acto probatorio anticipado, el fiscal del caso, el querellante adhesivo si lo hubiere, y dicho acto será presidido personalmente por el Juez del proceso”.

Artículo 19. Se adiciona un párrafo al artículo 365 del Código Procesal Penal, Decreto 51-92 del Congreso de la República y sus reformas, el cual queda así:

“De igual forma, el tribunal podrá decidir que las declaraciones testimoniales se realicen a través de videoconferencia u otros medios audiovisuales, desarrollándose el trámite, según lo estipulado en este Código”.

Artículo 20. Se reforma el segundo párrafo del artículo 365 del Código Procesal Penal, Decreto 51-92 del Congreso de la República y sus reformas, el cual queda así:

“Si el testigo residiere en el extranjero o por algún obstáculo imposible de superar no pudiere concurrir al debate, las reglas anteriores podrán ser cumplidas por medio de suplicatorio, carta rogatoria o requerimiento, pudiendo las partes designar quien las representará ante el comisionado o consignar por escrito las preguntas que deseen formular. De igual forma, se podrá tomar la declaración a través de videoconferencia o cualquier otro medio audiovisual, conforme a las disposiciones de este Código”.

Artículo 21. Se adiciona el párrafo siguiente al artículo 317 del Código Procesal Penal, Decreto 51-92 del Congreso de la República y sus reformas el cual queda así:

“Cuando se tema por la vida y/o integridad física del testigo se tomará su declaración como anticipo de prueba por videoconferencia u otro medio electrónico con la presencia del abogado defensor designado por el imputado y en su defecto por el que designe la Defensa Pública Penal; y en caso de no existir imputado, igualmente se hará comparecer a un defensor público de oficio, para garantizar la legalidad de la declaración testimonial en esta forma: así mismo comparecerán en ese acto probatorio anticipado, el fiscal del caso, el querellante adhesivo si lo hubiere, y dicho acto será presidido personalmente por el Juez del proceso”.

En este caso se observará lo requerido por los artículos 218 BIS y 218 TER.

Artículo 22. Se adiciona el párrafo siguiente del artículo 318 del Código Procesal Penal, Decreto 51-92 del Congreso de la República y sus reformas el cual queda así:



00000041

"En los actos de anticipo de prueba testimonial que sean de extrema urgencia, cuando el caso lo amerite y justifique se recibirá la declaración del testigo por videoconferencia u otro medio electrónico con la presencia del defensor de oficio".

En este caso se observará lo regulado en los artículos 218 BIS y 218 TER.

Artículo 23. Se adiciona el párrafo siguiente al artículo 348 del Código Procesal Penal, Decreto 51-92 del Congreso de la República y sus reformas el cual queda así:

"En este caso, la declaración testimonial que lo amerite y justifique se recibirá como anticipo de prueba mediante videoconferencia u otro medio electrónico en las condiciones que lo regula los artículos 317 y 318 de este Código".

En este último caso se observará lo regulado en los artículos 218 BIS y 218 TER.

Artículo 24. Se modifica el Artículo 379 del Código Procesal Penal, Decreto 51-92 del Congreso de la República y sus reformas el cual queda así:

"Artículo 379. Incomparecencia. Cuando el perito o testigo oportunamente citado no hubiere comparecido, el presidente dispondrá lo necesario para hacerlo comparecer por la fuerza pública. Si estuviere imposibilitado para concurrir y no se pudiera esperar hasta la superación del obstáculo, o no resultare conveniente la suspensión de la audiencia, el presidente designará a uno de los miembros del tribunal para que la declaración se lleve a cabo donde esté la persona a interrogar. Todas las partes podrán participar en el acto, según las reglas anteriores.

Se levantará, lo más detallada posible, que será firmada por quienes participen en el acto, si lo desean, la que se introducirá por su lectura al debate.

Si el testigo residiere en el extranjero o por algún obstáculo imposible de superar no pudiese concurrir al debate, las reglas anteriores podrán ser cumplidas por medio de suplicatorio, carta rogatoria o requerimiento, pudiendo las partes designar quien las representará ante el comisionado o consignar por escritos las preguntas que deseen formular. De igual forma, se podrá tomar la declaración a través de videoconferencia o cualquier otro medio audiovisual, según lo estipulado en el presente Código."

CAPITULO III

DE LAS REFORMAS AL DECRETO 17-73 CÓDIGO PENAL

Artículo 25. Se adiciona un párrafo final al artículo 201 del Decreto 17-73 del Congreso de la República, Código Penal el cual queda así:



00000042

“Artículo 201. Plagio o Secuestro. A los autores materiales o intelectuales del delito de plagio o secuestro de una o más personas con el propósito de lograr rescate, canje de personas o la toma de cualquier decisión contraria a la voluntad del secuestrado o con cualquier otro propósito similar o igual, se les aplicará la pena de muerte y cuando ésta no pueda ser impuesta, se aplicará prisión de veinticinco (25) a cincuenta (50) años. En este caso no se apreciará ninguna circunstancia atenuante.

Los cómplices o encubridores serán sancionados con pena de veinte (20) a cuarenta (40) años de prisión.

A quienes sean condenados a prisión por el delito de plagio o secuestro, no podrá concedérseles rebaja de pena por ninguna causa.

Igualmente incurrirá en la comisión de este delito y le serán aplicables las sanciones de privación de libertad respectivas contempladas en los párrafos anteriores, en los casos siguientes:

- a) Quienes mediante coacción, amenazas o acción, privare de libertad permanente o temporal a otra persona, o cualquier otra acción que vaya en contra del derecho de libertad de la misma, pretenda obtener beneficio económico, alguno o que la persona ejecute o deje de hacer algo.
- b) Quien con violencia, amenaza o coacción, dentro de una unidad o vehículo de servicio de transporte público, prive de su libertad de acción y locomoción de cualquier forma y/o tiempo a los pasajeros y operadores de la misma”.

Artículo 26. Se reforma el artículo 261 del Decreto 17-73, Código Penal el cual queda así:

“Artículo 261. Extorsión. Quien, para procurar un lucro injusto, para defraudarlo o exigirle cantidad de dinero alguna con violencia o bajo amenaza directa o encubierta, o por tercera persona y mediante cualquier medio de comunicación, obligue a otro a entregar dinero o bienes; igualmente cuando con violencia lo obligare a firmar, suscribir, otorgar, destruir o entregar algún documento, a contraer una obligación o a condonarla o a renunciar a algún derecho, será sancionado con prisión de seis (6) a doce (12) años inmutables”.

CAPITULO IV

DE LAS REFORMAS AL DECRETO 28-2008 LEY REGULADORA DEL PROCEDIMIENTO DE EXTRADICIÓN

Artículo 27. Se reforma el artículo 30 de la Ley Reguladora del Procedimiento de Extradición, Decreto 28-2008 del Congreso de la República, adicionando un párrafo final al artículo el cual queda así:



00000043

“Artículo 30. Causas para diferir la entrega. A falta de disposición expresa en los tratados, convenios o arreglos internacionales, la entrega deberá diferirse cuando:

- a) La persona requerida se encuentre sujeta a proceso penal en el país.
- b) La persona requerida se encuentre cumpliendo condena en Guatemala.

En ambos casos, la entrega se efectuará hasta que la persona solvente su situación jurídica.

La entrega no será diferida por causa de procesos iniciados posteriormente a la fecha de solicitud de extradición.

Como excepción a lo dispuesto en el presente artículo y cuando la solicitud de extradición se refiera a personas extranjeras detenidas, procesadas o cumpliendo condena en Guatemala, por los delitos considerados en la Ley Contra la Delincuencia Organizada, Decreto 21-2006 del Congreso de la República, los jueces podrán suspender el procedimiento, proceso o cumplimiento de la pena y autorizar la entrega de la persona requerida”.

CAPITULO V

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 28. Inconmutabilidad de la pena. Cuando la pena de prisión a imponerse, de acuerdo a las disposiciones de las leyes que se reforman y la presente, sea inconmutable, no procederá medida sustitutiva alguna.

Artículo 29. Vigencia. El presente decreto entra en vigencia a los ocho días de su publicación en el Diario Oficial.

PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN

DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, A LOS
_____ DIAS DEL MES DE _____ DE DOS MIL NUEVE.